

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA

AL TITULAR DEL ENTE OBLIGADO A TRAVES DE GABRIELA GÁMEZ AGUIRRE, OFICIAL DE
INFORMACIÓN DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

HAGO SABER: que en el procedimiento administrativo NÚMERO 1-RR-2019, el Instituto de Acceso a la Información Pública, con fecha 17 de julio de 2020, ha pronunciado la resolución que literalmente **DICE:**



NUE 1-RR-2019

Zúñiga Viuda de Cristales, Pérez Gómez y otras contra Presidencia de la República (PR)

Resolución definitiva

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: San Salvador, a las nueve horas con cuarenta y cuatro minutos del diecisiete de julio de dos mil veinte.

El presente procedimiento de revisión de reserva ha sido promovido por **Concepción Idalia Zúñiga Viuda de Cristales, José Antonio Pérez Gómez, Jeannette Guadalupe Martínez Pineda, Raúl Sigüenza Sigüenza, Luis Wilfredo Berríos Alvarenga, Francisco Salvador García Trujillo, Juan José Reynosa y Lyz Milizen Carla Samantha Cerna de Gallegos**, quienes presentaron escrito en el que solicitaron la desclasificación directa de documentación que fue declarada como reservada por la **Presidencia de la República (PR)**.

Descripción del caso

I. El 25 de octubre de 2019, las personas antes mencionadas, solicitaron la desclasificación directa de la información consistente en: “informe justificativo emitido por la Presidencia en el cual exponen los motivos de la supresión de plazas acorde a las reformas efectuadas al Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo (RIOE), particularmente en el art. 21 de dicho cuerpo normativo. Además, de todos los documentos que sirvieron de base para tomar la decisión de supresión de plazas, particularmente aquella de carácter financiero y de gestión del personal (*Sic.*)”.

En el escrito presentado por las y los solicitantes, hacen alusión a las resoluciones emitidas por el anterior oficial de información de la **PR** a las quince horas del once de julio y diez horas con diez minutos del veintiséis de julio, ambas de 2019, y concernientes a los procedimientos de referencia 276-2019 y 318-2019. En ambos casos se resuelve, entre otras cuestiones: “Declárese reservada la información presentada al Consejo de Ministros o producida y generada por el mismo, que *(i) contiene opiniones y recomendaciones que sirven de base para las deliberaciones y decisiones del Consejo de Ministros en tanto no se haya adoptado decisión definitiva; (ii) comprometa las estrategias estatales en los procedimientos administrativos necesarios para la consecución de las mismas*, según lo establecido en el art. 19 literales e. y g. de la LAIP”.

Según las resoluciones en mención, la reserva fue decretada por el Secretario Jurídico de la **PR**, por facultad delegada en Consejo de Ministros con fecha 10 de junio de 2019. En lo concerniente al plazo de reserva se estableció que “estará sujeto a que se mantengan las causales por las que se ha reservado dicha información, pero que en ningún caso podrá exceder de siete años contados a partir de la fecha en que la información haya sido agregada al expediente de reserva”.

En ese contexto, la parte actora interpuso el escrito para iniciar procedimiento de revisión de reserva, fundamentando su inconformidad en que dicha declaratoria de reserva no está contemplada dentro del índice del ente obligado. Además, que el acto administrativo es genérico puesto que no delimita en absoluto el contenido de los documentos que abarca la reserva.

En ese mismo acto, se advirtió que ante la ausencia de una disposición clara en la LPA que establezca un término para ejercer el derecho de defensa, y atendiendo a lo dispuesto en el art. 38 inciso segundo del Reglamento de la Ley de Acceso a la Información Pública se otorgará a la **Presidencia de la República (PR)** un plazo de quince días hábiles, contados a partir del próximo de efectuada la notificación para que presente un informe por medio del cual incorpore sus alegatos de defensa, con base al art. 86 numeral 3 de la LPA. Sin embargo, finalizó el término habilitado sin que la **PR** presentará el informe correspondiente.

Análisis del Caso

Para el desarrollo de la presente resolución se analizará el caso de la siguiente manera: Incorporación de la documentación presentada por la parte actora *(I)*; Breve referencia al derecho de acceso a la información pública (DAIP) *(II)*; análisis de los requisitos de información reservada

en relación al caso en estudio (*III*); y decisión sobre la clasificación de la información objeto de controversia (*IV*).

I. En el escrito presentado por la parte actora, se adjuntaron las resoluciones emitidas por el anterior oficial de información de la **PR** a las quince horas del once de julio y diez horas con diez minutos del veintiséis de julio, ambas de 2019, y concernientes a los procedimientos de referencia 276-2019 y 318-2019.

Dichas resoluciones sirvieron de sustento para la presentación del escrito inicial; pues, en ese momento, la parte actora argumentó que la reserva no constaba en el índice correspondiente. Así, al gozar las resoluciones emitidas por oficiales de información de publicidad oficiosa, permite que la ciudadanía conozca los argumentos de los entes obligados para sustentar las reservas de la información.

Es en ese contexto que, para emitir la decisión de fondo, este Instituto incorporará como elementos probatorios dichas resoluciones y el Índice de Información Reservada que se encuentra en el portal de transparencia de la **PR** (<https://www.transparencia.gob.sv/institutions/capres/documents/indice-de-informacion-reservada>), pues claramente son útiles e idóneas para el objeto de controversia, de conformidad a los Arts. 318 y 319 del Código Procesal Civil y Mercantil (CPCM).

Lo anterior resulta indispensable ante la total inactividad de la **PR**, pese a habersele brindado la oportunidad procedimental de ser escuchado en sus argumentos. Además, es importante dejar constancia que dicha incorporación no se toma en un contexto de discrecionalidad y, mucho menos, de arbitrariedad por parte de este ente colegiado; por el contrario, la norma procedimental administrativa exige que las actuaciones de “la autoridad administrativa se sujeten a la verdad material que resulte de los hechos, **aun cuando no hayan sido alegados ni se deriven de pruebas propuestas por los interesados**” (Art. 3, numeral 8 de la LPA).

Además, es importante aclarar que esta decisión no infiere negativamente en el derecho de defensa del ente obligado, pues la documentación incorporada no pertenece a la parte actora; por el contrario, con base a la Teoría de la Prueba, la documentación a analizar se rige bajo el **principio de comunidad de la prueba**, lo cual se traduce en que al ser introducida legalmente al procedimiento, debe tenerse en cuenta para determinar la existencia o inexistencia del hecho a que se refiere, o sea, la

prueba pertenece al procedimiento y no exclusivamente a una de las partes. En ese contexto, las resoluciones y el índice de reserva serán utilizados para determinar los hechos alegados.

Por ello, este Instituto con el ánimo de emitir un pronunciamiento de fondo apegado a derecho y a los hechos, es que incorpora dicha documentación para ser valorada en el análisis jurídico del caso.

II. En primer lugar, es preciso recordar que el DAIP tiene una condición indiscutible de derecho fundamental, reconocida tanto por la jurisprudencia nacional como internacional. Por lo tanto, corresponde a este Instituto como garante de ese derecho, realizar la labor de armonización y determinación del alcance de tal derecho, así como la ponderación cuando este entre en colisión con otros derechos fundamentales o intereses legítimos, con cuya esfera de aplicación interactúa, especialmente cuando deba pronunciarse sobre la validez de restricciones a dicho derecho.

Ahora bien, el DAIP no es una prerrogativa absoluta, su interacción con otros derechos de igual rango posibilita escenarios de restricciones justificadas. En este sentido, la LAIP regula las limitantes para acceder a la información, que en términos generales se clasifican en: la información reservada – art. 19-; información confidencial (en todas sus dimensiones) –art. 24-; y la información inexistente – art. 73-.

Por otro lado, toda restricción al DAIP debe analizarse ponderando el principio de máxima publicidad consagrado en el art. 4 de la LAIP; es decir, que toda la información en poder de las entidades obligadas es pública, salvo que cuente con algunas de las excepciones contempladas en la misma ley, es decir,, las restricciones al DAIP deben cumplir ciertos requisitos que vienen dados por ministerio de ley, a efecto de generar seguridad jurídica en el ejercicio del derecho de acceso a la información, pues al estar la información en control del Estado, debe evitarse al máximo la actuación discrecional y arbitraria del mismo, en el establecimiento de restricciones al derecho¹.

Específicamente, para la restricción de la reserva de información, este Instituto ha señalado ciertos requisitos a cumplir, mismos que se amparan en los arts. 19, 20 y 21 de la LAIP y el análisis de cada uno de ellos, se encuentran directamente relacionados con el test o examen del daño; lo cual no es más que realizar un análisis comparativo entre el DAIP y el derecho –de igual rango–, que se pretende proteger con el fin de ponderar cuál de los dos derechos debe ceder.

¹ Corte IDH. *Caso Claude Reyes y otros. Op.cit.*

III. Teniendo claridad de lo anterior, es preciso analizar la reserva detallada en el índice que consta en el portal de transparencia de la **PR**, consistente en el: “Expediente que contiene la información presentada al Consejo de Ministros o producida y generada por el mismo, que (i) contiene opiniones y recomendaciones que sirven de base para las deliberaciones y decisiones del Consejo de Ministros en tanto no se haya adoptado decisión definitiva; (ii) comprometa las estrategias estatales en los procedimientos administrativos necesarios para la consecución de las mismas”.

De la información detallada se entendería que la **Presidencia de la República** ha creado un expediente en el que anexa documentos que han sido presentados al Consejo de Ministros o producidos y generados en dicho espacio; y, además, esos documentos se incorporan a ese expediente cuando cumplen con dos requisitos: el primero de ellos, es que dicha documentación contenga opiniones y recomendaciones de procesos deliberativos en curso; y, que esos documentos comprometan estrategias estatales de procedimientos administrativos (...), siendo este el segundo requisito.

Al respecto, es importante decir que el acto de reserva de información comprende un tratamiento especial pues, como se expuso en el epígrafe anterior, la información reservada es información pública a la que se le restringe su acceso. Entonces, es dable afirmar que, por regla general, toda información pública que se produce, genera o modifica goza de irrestricta divulgación; sin embargo, en más de alguna ocasión dicha información pública no puede ser divulgada en un lapso de tiempo presente y específico, siendo en esa circunstancia que la LAIP habilita la ejecución de un acto administrativo denominado “declaratoria de reserva”.

Dicha habilitación, se encuentra desarrollada en el Reglamento de la LAIP, el cual contempla dos formas de clasificación (Art. 17): inmediata y posterior. **La inmediata hace referencia cuando la información se genere, obtenga, adquiera o transforme.** Por su parte, la clasificación posterior se regula en suplencia ante la posible omisión de realizar la reserva inmediata. Dicho en otros términos, la información debe ser reservada desde el momento de su generación, obtención, adquisición o transformación y la **clasificación posterior es únicamente la excepción** a la regla y no queda a discreción del ente obligado, al momento de generar información, si la clasifica de forma inmediata o posterior, pues esta última se podría constituir incluso como negligencia.

Lo anterior se relaciona debido a que habilitar un expediente que, *per se*, será reservado y a este se le incorporarán los documentos que al momento de su generación o presentación se consideren que revisten de las dos condicionantes expuestas (opiniones o estrategias de Estado), es violatorio al

debido ejercicio del DAIP para toda persona y no únicamente para quien solicita una información específica.

Dicha violación al DAIP es la consecuencia de una administración pública que no está ejecutando los actos de reserva en cumplimiento a lo mandado por la normativa en materia de acceso a la información pública. El RLAIP establece expresamente que la clasificación de información debe hacerse al momento de su generación, esto exige que la clasificación debe ser específica y en tiempo presente.

Ahora bien, la disposición del RLAIP que contempla las formas de clasificar información reservada, se conjuga con todas aquellas disposiciones que establecen los requisitos que debe cumplir una declaratoria de esa naturaleza; es decir, cada ente obligado debe realizar un análisis interpretativo sistémico, en aras de garantizar el bien jurídico protegido de la legislación de la materia. Es así que los arts. 21 y 22 de la LAIP mandatan a los entes a realizar un test del daño por cada información que clasifica y a cumplir con los requisitos que debe contener la resolución de reserva, específicamente lo establecido en la letra “e” del art. 22 de la LAIP (“las partes de información son sometidas a confidencialidad o reserva y las que están disponibles para acceso público”), exige la singularización en la reserva.

En razón de ello, no es lo mismo reservar un expediente porque al momento de su creación contiene información reservada, a crear un expediente reservado para incorporar los documentos que a discreción de la autoridad o del delegado deben resguardarse en él; pues la reserva no opera en razón de la ubicación del documento; prueba de ello, es que puede existir la posibilidad de que un mismo expediente contenga información pública y reservada (o inclusive hasta confidencial) sin que implique que ante alguna solicitud de ese expediente, deba entregarse o denegarse toda la información; sino que, con el fin de garantizar el DAIP, existen matices como la versión pública (Art. 30 de la LAIP).

Bajo ese argumento, no es necesario crear un expediente reservado para que en este se incorpore toda aquella información que es generada en momentos diferentes, pasando por alto realizar la tramitación interna para declarar la reserva exigida por ley.

En consecuencia, se advierte que se ha hecho una reserva genérica que permite al ente obligado alegarla ante cualquier documento que se pueda solicitar, tal como es el caso de las resoluciones emitidas por el anterior Oficial de Información de la **PR** a las quince horas del once de julio y diez horas con diez minutos del veintiséis de julio, ambas de 2019, y concernientes a los procedimientos de referencia 276-2019 y 318-2019.

IV. En este sentido, es procedente que, desde la reserva que se ha revisado en el presente procedimiento, se verifique la línea resolutive del ente obligado tomando las resoluciones de referencia 276-2019 y 318-2019, en las que se ha invocado la reserva detallada en el epígrafe anterior. Esto es indispensable, debido a que las resoluciones de los entes obligados crean precedentes que serán utilizados para la tramitación de cualquier solicitud de información.

En ese orden de ideas, para introducir el análisis, es indispensable recalcar que toda reserva debe apegarse al cumplimiento de los requisitos legales determinados para tal efecto. Es así como, según nuestra legislación, para que pueda operar una declaratoria de reserva, se necesita la concurrencia de los siguientes tres requisitos:

(a) El primer requisito es el de **legalidad**, pues para que un ente obligado pueda reservar la información pública se debe analizar respecto al marco legal vigente, esto para garantizar que los límites al ejercicio de este derecho estén dirigidos a la protección de otros derechos de idéntica o superior importancia; es decir, que la información solicitada encuadre en alguna de las causales de excepción al acceso a la información previstas en el artículo 19 de la LAIP; y, además, que cumpla con el procedimiento de clasificar información; es decir, que la declaratoria de reserva sea emitida por la persona competente para ello, tal como lo establece el art. 21 de la LAIP; 17, 27, 28 y 31 de su Reglamento (RELAIP) al reglar que la declaratoria debe ser emitida por el titular del ente obligado o aquel a quién se delegue.

(b) El segundo requisito es el de **razonabilidad**. No basta con que el ente obligado cite disposiciones legales que lo habiliten a denegar la información por considerarla reservada, también es necesario que se razone y fundamente la adopción de una limitación al acceso a la información pública [reguladas en el art. 21 de la LAIP]; con ello, se busca reducir la arbitrariedad de los funcionarios que tienen la potestad de clasificar la información y evitar denegaciones injustificadas o contrarias al DAIP.

Es importante enfatizar que este Instituto tiene el deber de analizar de **manera independiente** cada declaratoria de reserva, sin importar que en un mismo acto se decida reservar varia documentación.

(c) Por último, el tercer requisito es el de **temporalidad**; indica que la reserva debe alegarse por un tiempo determinado; pues su naturaleza no es permanente sino transitoria; ya que atiende escenarios circunstanciales, conservando su naturaleza pública. Por tanto, al desaparecer la causa que originó la reserva, queda habilitada la apertura de la información. Para tal efecto, el Art. 20 de la LAIP

establece el plazo de la reserva, señalando, en principio, que la información se puede mantener en tal carácter hasta por un periodo de siete años.

Por lo que, condicionar el plazo de reserva al cumplimiento de ciertas circunstancias, a la luz del art. 20 de la LAIP, es una clara contradicción a lo regulado por la ley de la materia. Y, como es de conocimiento de toda persona administradora pública, los y las funcionarios/as públicos/as están regidos/as por el Principio de Legalidad consagrado en el art. 86 de la LAIP; por lo que, en la declaratoria de reserva se debe velar por cumplir con ese principio y, por ende, determinar la temporalidad de la reserva con observancia a lo que la LAIP faculta y establece.

IV. Habiendo estudiado las implicaciones de cada requisito exigido para la clasificación de información, se debe tomar como base el análisis vertido en las resoluciones de la **PR** que restringieron el acceso a información relacionada a “informe justificativo emitido por la Presidencia en el cual exponen los motivos de la supresión de plazas acorde a las reformas efectuadas al Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo (RIOE), particularmente en el Art. 21 de dicho cuerpo normativo. Además, de todos los documentos que sirvieron de base para tomar la decisión de supresión de plazas, particularmente aquella de carácter financiero y de gestión del personal (*Sic.*)”, en relación a lo analizado del índice de reserva publicado en el Portal de Transparencia de la **PR**.

De manera ejemplificativa, en la resolución de referencia 318-2019 de las diez horas con diez minutos del veintiséis de julio de 2019, se plasma la respuesta brindada por el Secretario de Asuntos Jurídicos de la **PR** quien inicia su argumentación aclarando que “si bien el requerimiento realizado no se enmarca en un punto conocido en alguna sesión del Consejo de Ministros, la información está incluida en el expediente que contiene la información presentada al Consejo de Ministros o producida y generada por el mismo (...)”.

Para sustentar dicha incorporación del informe al expediente mencionado, el Secretario Jurídico alegó que “al interior del Consejo de Ministros se llevan a cabo deliberaciones para las cuales se presentan a todos los funcionarios que integran dicho Órgano, información que sirve de insumo como base para el proceso deliberativo antes mencionado”. Continúa afirmando que “mientras dicho acuerdo no sea alcanzado, la información que ha sido presentada al Consejo de Ministros y/o que ha sido generada o producida por el mismo, puede contener opiniones o recomendaciones que se circunscriben estrictamente al proceso deliberativo de dicho ente colegiado; por dicho motivo, sustentan la restricción al DAIP con la letra “e” del Art. 19 de la LAIP.

Además, la **PR** asevera que una vez tomados los acuerdos en el Consejo de Ministros no siempre su decisión se agota con la adopción en el acta respectiva sino que trascienden en el tiempo al formar parte de una estrategia o función estatal para cuya implementación es necesario llevar a cabo procedimientos administrativos; por lo que, la divulgación de la información puede obstaculizar la adecuada implementación de estrategias estatales. En razón de ello, alegan una segunda reserva basada en la letra “g” del art. 19 de la LAIP.

Ambas reservas durarán mientras se desarrollan los procedimientos administrativos para lograr los resultados de las estrategias estatales contenidas.

Es decir, de la argumentación planteada para incorporar la información al expediente reservado, se están utilizando dos causales para restringir su acceso por tiempo indefinido, declarando reserva a futuro, pues al momento que se desvanezca la causal de la letra “e” con la toma de decisión por el Consejo de Ministros, se observaría la causal de la letra “g” porque automáticamente se traduce en una estrategia de Estado.

Al respecto, es importante enfatizar que dichas acciones contravienen el **principio de legalidad**, pues la normativa en materia de acceso a la información pública exige que la información encuadre en alguna de las causales de excepción al acceso a la información previstas en el artículo 19 de la LAIP (Art. 21 letra “a” de esa misma ley). Con ello, es claro que la habilitación legal de reservar información está condicionada a la observancia de ese requisito, el cual implica que al momento de realizar la clasificación de la información, está (en tiempo presente) se ve “afectada” por una causal del art. 19 de la LAIP.

Por otro lado, con la fundamentación plasmada en las resoluciones es evidente que las reservas impuestas a los informes relacionados a la supresión de plazas, incumplen el **principio de razonabilidad**, teniendo como consecuencia una violación al debido ejercicio del derecho de acceso a la información pública de toda persona, pues el informe ni siquiera se enmarca dentro de la información conocida o producida por el Consejo de Ministros; es decir, el expediente del Consejo de Ministros ha sido clasificado como reservado tomando en cuenta que ese expediente se conforma por información que ha sido “presentada, producida y generada por el Consejo de Ministros”; sin embargo, el informe que fue objeto de restricción no fue ni presentado, ni generado ni producido por el Consejo de Ministros. Por tanto, la incorporación de ese documento se realizó en un acto antojadizo y arbitrario que, además, no cumple con las exigencias legales para contar con una doble reserva que son excluyentes entre sí porque, entre otras cuestiones, no convergen en un mismo lapso de tiempo.

Entonces, la justificación hecha para clasificar como reservada la información resulta insuficiente e incongruente, prueba de ello es lo resuelto por el Ministerio de Hacienda en solicitudes de similar objeto como son las resoluciones de referencia UAIP/RES.009.3/2020 (<https://www.mh.gob.sv/downloads/pdf/700-UAIP-IF-2020-11935.pdf>) y UAIP/RES.006.3/2020 (<https://www.mh.gob.sv/downloads/pdf/700-UAIP-IF-2020-11932.pdf>) en las que se ordenó la entrega de estudios técnicos que justifican la supresión de plazas de esa Cartera de Estado. Entonces, si otra institución facilitó el acceso a una información de igual naturaleza, no existe algún factor diferencial que le permita a la **PR** denegar esa misma documentación.

Además, es importante tomar en cuenta el interés general de ese informe; pues, en la Sentencia de Amparo 328-2013, se afirmó que previo a ordenar la supresión de un puesto de trabajo se requiere que la autoridad competente cumpla con ciertas formalidades, entre ellas, “elaborar un estudio técnico de justificación, basado exclusivamente en aspectos de presupuesto, necesidad del servicio y técnicas de análisis ocupacional. Esto lleva a considerar que por ser ese estudio técnico (o informe) un requisito indispensable para la supresión de plaza, su generación no constituye algún riesgo a un derecho de igual rango al DAIP; por el contrario, la naturaleza de esta información reviste de un interés general desde el momento de su creación, ya que la ciudadanía tiene derecho a conocer que la toma de decisiones de los administradores públicos, se realiza con apego a la legalidad y en cumplimiento a los requisitos exigidos para ello; requisito que, en este caso, debió cumplirse, pues la jurisprudencia emitida por la Sala de lo Constitucional es fuente de Derecho y, por tanto de obligada observancia para el resto de las instituciones (Sentencia de Amparo 713-2015, del uno de diciembre de dos mil diecisiete).

La **PR** debe tener presente que el DAIP es un derecho humano de toda persona; por lo que, está totalmente obligada a garantizarla. Bajo esa lógica, debe ponderar los efectos generales de las resoluciones a solicitudes de información; por lo que, con las resoluciones emitidas, se ha vulnerado el DAIP de todas las personas que quieran acceder a ese informe. Es así que, la motivación de una reserva debe ser congruente con la causa legal que se invoca y debería ser inaceptable para los tomadores de estas decisiones, fundamentar sus reservas de forma aislada sin guardar relación con lo que se pretende proteger.

Por último, en cuanto a la **temporalidad**, resulta necesario enfatizar que los entes obligados no pueden perpetuar la restricción de una información, listando una serie de causales que se irán cumpliendo cuando la anterior se desvanezca. Esto es vulneratorio al Art. 20 de la LAIP, que regula los plazos máximos de reserva que, en principio son siete años. Además, ese mismo artículo estipula

que la información podrá ser desclasificada cuando se extingan las causales que dieron origen a esa clasificación, antes del vencimiento de este plazo.

Es decir, el plazo de reserva es un requisito tan importante como el de razonabilidad o el de legalidad; puesto que la delimitación temporal del ejercicio del DAIP a una información en particular otorga seguridad jurídica a la persona. Por ello, resulta inconcebible invocar una causal de reserva tras otra para lograr restringir el acceso a una información por el plazo de siete años; teniendo esto como consecuencia, el incumplimiento al requisito de **temporalidad**.

V. En conclusión, al analizar el índice de información reservada y la aplicación de este en procedimientos tramitados por la **PR**, se advierte que a raíz de la reserva genérica, se ha derivado una interpretación errónea para reservar información producida posteriormente. Además, se evidencia que crear un expediente reservado para incorporar en él documentos que, a su vez, se le imponen las dos causales de reserva estudiadas se puede prestar para realizar actos discrecionales y sin sustento legal para hacerlo.

Por ello, el levantamiento de reservas en la manera que el ente obligado la ha realizado, acarrea consecuencias en los procedimientos de acceso a la información pública que se tramitan; pues, claramente, cada administración pública debe apegar sus actuaciones al **Principio de Coherencia**, es decir, que deben ser congruentes con los antecedentes administrativos, salvo que por las razones que se expliciten por escrito y se motiven adecuadamente, sea pertinente en algún caso apartarse de ellos (Art. 3 numeral 7 de la LPA).

Es por tal razón que se debe ordenar a la **PR** que modifique la reserva decretada para el “Expediente que contiene la información presentada al Consejo de Ministros o producida y generada por el mismo, que (i) contiene opiniones y recomendaciones que sirven de base para las deliberaciones y decisiones del Consejo de Ministros en tanto no se haya adoptado decisión definitiva; (ii) comprometa las estrategias estatales en los procedimientos administrativos necesarios para la consecución de las mismas”, tomando en cuenta lo analizado en el presente acto; lo cual, debe ser adoptado para los futuros procedimientos de acceso a la información pública que se tramiten, salvaguardando el debido ejercicio del derecho de toda persona para poder conocer la documentación que se genere en esa instancia y de forma específica por cada documento generado y decretada en ese momento.

Además, lo anterior implica que se debe estudiar la documentación que se haya incorporado a dicho expediente del Consejo de Ministros, procurando declarar las reservas correspondientes en

observancia a lo que la legislación de la materia exige, incluyendo el “informe justificativo emitido por la Presidencia en el cual exponen los motivos de la supresión de plazas acorde a las reformas efectuadas al Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo (RIOE), particularmente en el Art. 21 de dicho cuerpo normativo. Además, de todos los documentos que sirvieron de base para tomar la decisión de supresión de plazas, particularmente aquella de carácter financiero y de gestión del personal (*Sic.*)” del cual ya se comprobó que, por su finalidad, no cumplen con los parámetros que la LAIP exige para la restricción de divulgación de esa información.

Por último, es importante reiterar que acceder a información generada o en poder del Estado no es una concesión que se le hace a las personas peticionarias, sino que es un derecho fundamental que conlleva una obligación del Estado de garantizarlo. Por ello, ante una negativa para acceder a esa información, se debe brindar respuesta de forma tal que dicha restricción se vea motivada, justificada, singularizada y coherente.

3. Decisión del caso

Por tanto, de conformidad con las razones antes expuestas y disposiciones legales citadas, y con base a los Artículos 94, 96 letra “c” y 102 de la LAIP, este Instituto **resuelve**:

a) Ordenar a la Presidencia de la República que, a través de su titular y en un plazo de cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente a la notificación de la presente resolución, modifique la reserva levantada para el “Expediente que contiene la información presentada al Consejo de Ministros o producida y generada por el mismo, que (i) contiene opiniones y recomendaciones que sirven de base para las deliberaciones y decisiones del Consejo de Ministros en tanto no se haya adoptado decisión definitiva; (ii) comprometa las estrategias estatales en los procedimientos administrativos necesarios para la consecución de las mismas”, elaborando las declaraciones de reservas de los documentos que se hayan incorporado a dicho expediente, de conformidad a lo exigido por la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP:

b) Ordenar a la Presidencia de la República que, a través de su titular y en un plazo de cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente a la notificación de la presente resolución, desclasifique la reserva de la información fue estudio de análisis de los procedimientos 318-2019 y 276-2019, en aras de garantizar el derecho de acceso a la información pública de toda persona y contribuir a la instauración de una Administración Pública más transparente.

